# CONTRIBUCIONES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA AL PRÓXIMO INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA RESOLUCIÓN 47/21 DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS.

El presente documento fue elaborado en respuesta a la convocatoria enviada para la preparación del informe de 2024 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de conformidad con la Resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos, sobre la “*promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas africanas y afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del orden, mediante un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales*”.

La información que se presenta a continuación corresponde a las respuestas allegadas por el **Departamento Nacional de Planeación** y el **Ministerio de Defensa Nacional**:

# **“Las manifestaciones múltiples, interseccionales y agravadas del racismo sistémico experimentado por diferentes grupos de africanos y afrodescendientes, en relación con el sexo, género, identidad de género, orientación sexual, edad, nacionalidad, situación migratoria, estatus de minoría, discapacidad, religión, estatus socioeconómico y otros estatus”.**

# **“Causas fundamentales e impulsores de la discriminación interseccional contra africanos y afrodescendientes, incluidas las relacionadas con los estereotipos y otras dimensiones estructurales, institucionales e históricas”.**

El principio de la diversidad étnica y cultural establecido en el artículo 7 de la Constitución Política de 1991, hace referencia al reconocimiento de la población colombiana como pluriétnica y multicultural. En este sentido, es a partir de la Constitución Política del 91 que se reconoce la presencia en Colombia de tres pueblos y comunidades étnicas: las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; el Pueblo Indígena y; el Pueblo Rrom o Gitano**.**

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018)[[1]](#footnote-1), se auto-reconocieron como pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas un total de 4.890.390 personas, equivalente al 10.5% del total de la población nacional aproximadamente. Al respecto, un total de 1.905.617, es decir un 4,4% de la población, se auto-reconoció como integrante de la comunidad indígena; en tanto que 2.649 personas, (0.006% de la población nacional) declararon su pertenencia al pueblo Rrom o Gitano y como pertenecientes a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras un total de 2.982.224 personas (6% de la población).

Al respecto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señaló que, para el caso de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, el registro había sido menor por algunos errores técnicos en el levantamiento del Censo, para el caso en concreto manifestó:

“*[…]* *En reconocimiento de las dificultades particulares del desempeño de la pregunta de autorreconocimiento étnico en el censo para la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, pero dada su concordancia estadística con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018, el DANE estableció la oficialidad de la declaración censal para esta población solo en materia de estructuras demográficas e indicadores sociales, información que permite caracterizar de manera precisa las brechas de esta población para identificar y reconocer sus condiciones de vida y posibilitar la generación de la política pública, y estimó la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, con carácter oficial, en****4.671.160 personas****para 2018 […]*”[[2]](#footnote-2).

Así las cosas, la cifra de **4.671.160 personas** pertenecientes a la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera corresponde a un 9.34% de la población nacional. Con este nuevo dato oficial, la población perteneciente a Pueblos y Comunidades étnicas en Colombia se estima en el 13.84% de la población aproximadamente.

En virtud de lo anterior, los pueblos y comunidades étnicas, en especial las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, vienen reivindicando durante décadas que sus poblaciones son mayores en comparación a lo que se recoge por parte de los censos y estadísticas oficiales. En el Censo del 2005 se elevaron varias objeciones por la metodología y la formulación de la pregunta que indagaban por el auto reconocimiento étnico-racial. En el Censo de 2018, las comunidades negras manifestaron que había ocurrido un “*genocidio estadístico”[[3]](#footnote-3),* puesto que la población NARP disminuyó en comparación con el Censo de 2005, pasando a ser 9,34% de la población del país, cuando en el 2005 las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras representaban el 10,6 %. Esta situación generó una grave afectación para la formulación de la política pública encaminada a atender y garantizar los derechos de la población NARP, cuestión que llevó a que la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-276 de 2022, ordenara al DANE tomar medidas correctivas en relación con la medición e identificación de los pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros.

*“[…] La Corte advierte que se trata de «un daño suficientemente documentado» que provocó «la invisibilización estadística de más de un millón de afrocolombianos. […] las omisiones del censo afectan el reconocimiento oficial de las diversidades en la población colombiana y obstruyen el diseño de políticas públicas idóneas que permitan superar las enormes brechas que golpean de forma desproporcionada a las poblaciones afrocolombianas […]*”.

De conformidad con la orden emitida por la Corte, el DANE presentó estudio a través del cual expuso los resultados de la evaluación de las causas internas y externas a la entidad que dieron lugar a las dificultades y a la eventual disminución en la identificación de la población afrodescendiente del país en los tres últimos censos de población, concluyendo entre otros que: *“[…]* *La revisión de la literatura producida por el DANE ha mostrado una subestimación de la población afrocolombiana debido a factores sociales y políticos en los cuales están inmersas las instituciones del gobierno nacional. En este punto, resulta de gran importancia el trabajo interinstitucional por parte de las instituciones gubernamentales y organismos internacionales interesados en los temas […]*”[[4]](#footnote-4).

Aunado a lo anterior, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, PND 2022-2026 *“Colombia Potencia Mundial de la Vida”,* expedido mediante la Ley 2294 de 2023, se reconoce y recoge varias de las manifestaciones de racismo sistémico experimentado por la Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en Colombia. Al respecto en dicho documento se menciona:

*“[…] Aunque los pueblos y comunidades étnicas, su diversidad, sus culturas, cosmovisiones y aportes al cuidado de la tierra, el ambiente y la naturaleza desde una óptica de respeto ancestral, constituyen riquezas de nuestra nación; ni la sociedad ni las instituciones públicas lo han reconocido. Estas poblaciones han padecido y siguen padeciendo diferentes tipos de violencia e injusticias, como el conflicto armado, el despojo territorial, y diferentes formas de exclusión social como el racismo y la marginación estructural. Si bien, la normatividad vigente y la jurisprudencia han sentado las bases para garantizar su participación en las decisiones que los afectan, los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom aún no ven sus derechos respetados ni garantizados.*

*En 2021 el índice de pobreza multidimensional (IPM) en los hogares, cuyo jefe de hogar se autorreconoció como indígena o como negro-afrocolombiano es sustancialmente mayor, comparado con el promedio nacional. En el caso de los hogares con jefe de hogar indígena, el IPM es del 42,7 % y en el de las comunidades negras, este indicador es del 24,5 %, en contraste con el 16,0 % del total nacional.*

*Estos pueblos han sido víctimas del conflicto armado de manera individual y colectiva. En el Registro Único de Víctimas (RUV) de la UARIV, a 2022 hay más de 600 sujetos colectivos que esperan reparación integral. Así mismo, los líderes y autoridades étnicas son un número significativo de los líderes sociales amenazados o asesinados reportados por la Defensoría del Pueblo. En los últimos quince años la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el impacto desproporcionado del conflicto armado en los pueblos y comunidades étnicas a través de diferentes providencias como los autos 004 (indígenas) y 005 (comunidades negras, afro, raizales y palenqueras) de 2009, o el Auto 266 de 2017, evidenciando que este no solo afecta individualmente a los miembros de las comunidades, sino también a su integridad étnica y cultural como pueblos y sus derechos como sujeto colectivo. En consecuencia, esta corporación ha declarado 39 pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural por causas asociadas al conflicto armado y a violencias estructurales relacionadas con el despojo de territorios colectivos, así como la ausencia de políticas públicas, con sistemas de información adecuados, que tengan en cuenta las especificidades culturales y territoriales de estos pueblos.*

*Actualmente existen deficiencias y vacíos en el proceso de registro de información referente a los pueblos y comunidades étnicas. Este problema del registro afecta a los derechos individuales y colectivos, y dificulta la acción institucional […]*”[[5]](#footnote-5)

A pesar de las deficiencias y vacíos en el proceso de registro de información referente a los pueblos y comunidades étnicas, en particular a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, realizado por el DANE, brinda algunas cifras oficiales que evidencian el racismo estructural experimentado por esta población. Un dato revelador es el Índice de Pobreza Multidimensional, en la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera; el 30,6% de las personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional en ese momento, mientras que, en el total nacional, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de 19,6%. Es decir, la pobreza multidimensional de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera fue 11 puntos porcentuales superior al del total nacional de la población.

Adicionalmente, en el Censo se observa un acceso dispar y desigual a los servicios públicos por parte de hogares con jefatura de población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, en comparación con el acceso a servicios públicos del total nacional de hogares del país.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Servicio público | Porcentaje de Acceso de Hogares con jefatura de población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera | Porcentaje de Acceso del total de Hogares del país (Total Nacional) |
| Energía | 92,7% | 96,3% |
| Acueducto | 69,6% | 86,4% |
| Alcantarillado | 54,1% | 76,6% |
| Internet | 26,3% | 43,4% |
| Gas natural | 49,2% | 66,8% |
| Recolección de Basuras | 69,5% | 81,6% |

**Tabla 1.** Elaboración propia. Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018.

Sobre el particular, es importante resaltar la necesidad de implementar un enfoque interseccional en la producción de datos e información estadística en nuestro país, entendido este como *“[...] una perspectiva que permite conocer la presencia simultánea de dos o más características diferenciales de las personas (pertenencia étnico-racial, género, discapacidad, etapa de ciclo de vital, entre otras) que en un contexto histórico, social y cultural determinado incrementan la carga de desigualdad, produciendo experiencias sustantivamente diferentes entre los sujetos* (DANE, adaptado de Corte Constitucional, 2015)”[[6]](#footnote-6) - se incluye el concepto de raza, fuera del texto original-.

Finalmente, se destaca que si bien el DANE produjo una Guía que “*brinda lineamientos conceptuales, normativos y metodológicos para promover y orientar la inclusión del Enfoque Diferencial e Interseccional de manera transversal en el proceso de producción y difusión de datos estadísticos*”[[7]](#footnote-7), es aún necesaria su implementación tanto por las entidades del Sistema Nacional de Estadística – SEN, como por parte de todas las entidades del Estado responsables de las políticas públicas del País.

# **Las acciones de los Estados y otros actores para promover la justicia y la igualdad raciales mediante un enfoque interseccional, incluyendo en relación con:**

# **- El diseño, implementación y evaluación de leyes, políticas, programas, planes de acción, medidas especiales, procesos y otras iniciativas relacionadas con la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la actuación de los agentes de las fuerzas del orden y el sistema de justicia penal, y otros sectores;**

# **- Los esfuerzos para mejorar la participación de los africanos y personas afrodescendientes en los asuntos públicos; y**

# **- Medidas para contribuir a la rendición de cuentas y reparación, incluyendo los legados de la esclavización y el colonialismo.**

En el marco de sus competencias, el Departamento Nacional de Planeación estimó pertinente informar sobre el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas, planes, programas y proyectos en el marco de este, encaminadas a promover la justicia racial, la igualdad y la garantía de derechos de la Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera.

1. ***Proceso de Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo-PND 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de La Vida” - Ley 2294 de 2023, con comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras***

El pasado 9 de diciembre de 2022 se concertó la ruta metodológica con las comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras para la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Potencia Mundial de la Vida”, cuyo proceso finalizó con el Espacio Nacional de Consulta Previa (ENCP) a través del acta de protocolización del 6 de febrero de 2023 en la cual quedaron registrados 157 acuerdos con las entidades del gobierno nacional.

Posteriormente, entre los meses de octubre y noviembre de 2023, se realizó la fase de posconsulta a través de 4 sesiones con la Comisión Segunda del Espacio Nacional de Consulta Previa en las que se validaron técnicamente las metas, los indicadores y la precisión presupuestal 2024 de los 157 acuerdos logrados en el marco de la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo. Como resultado de esta fase, se logró la concertación de 165 indicadores discriminados por sectores de la siguiente manera:

* Sector Agricultura: 13 Indicadores correspondientes a 11 acuerdos
* Sector Presidencia 15 indicadores correspondientes a 14 acuerdos
* Sector Interior: 15 indicadores correspondientes a 16 acuerdos
* Sector Reparación integral a las vícitmas: 7 indicadores correspondientes a 7 acuerdos
* Sector Salud e ICBF: 12 indicadores correspondientes a 12 acuerdos
* Sector SENA y ESAP: 5 indicadores correspondientes a 5 acuerdos
* Sector Ciencia y Tecnología: 1 indicador correspondiente a 1 acuerdo
* Sector Comercio: 5 indicadores correspondientes a 5 acuerdos
* Sector Minas y Energía: 12 indicadores correspondientes a 12 acuerdos
* Sector Transporte: 3 indicadores correspondientes a 3 acuerdos
* Sector Justicia: 6 indicadores correspondientes a 4 acuerdos
* Sector Educación y Cultura: 37 Indicadores correspondientes a 34 acuerdos
* Sector Relaciones Exteriores: 2 indicadores correspondientes a 2 acuerdos

Es importante mencionar que las metas, indicadores y la precisión presupuestal de los acuerdos logrados en la fase de consulta del PND 2022 – 2026 fueron concertados, por primera vez, en el 100% en el mismo año de su protocolización. Lo anterior permitirá fortalecer su seguimiento, a partir de la existencia de indicadores precisos y así como la definición anual de partidas presupuestales conforme a la ruta metodológica planteada.

De acuerdo con lo anterior, se anexa a esta respuesta la versión final de la matriz con las metas e indicadores de los 157 acuerdos logrados con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

1. ***Plan Plurianual de Inversiones y presupuesto concertado para el 2024***

En el marco de la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, como parte integral del Plan Plurianual de Inversiones se concertó un presupuesto indicativo de recursos de inversión para el cumplimiento de los compromisos de la consulta previa de 5,9 billones; igualmente, se incluyó un presupuesto indicativo sumando todas las fuentes de financiación, de un total de 29,2 billones de pesos, que incluye los recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías, recursos que se proyectan respetando el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Posteriormente en la fase de Posconsulta, la comisión segunda del Espacio Nacional de Consulta Previa y las entidades del gobierno nacional con el acompañamiento de la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior definieron la precisión presupuestal 2024 para el cumplimiento de los acuerdos la cual tiene un valor $1.357.948.993 para su ejecución en esta vigencia.

Para el año 2025, de conformidad con los establecido por el artículo 355 del PND[[8]](#footnote-8), durante el primer semestre del año se llevarán a cabo las mesas de partidas presupuestales con la participación de las entidades del Gobierno Nacional y la Comisión Segunda del Espacio Nacional de Consulta Previa, para realizar la precisión de la partida presupuestal correspondiente a la vigencia 2025.

1. ***Alcance del Plan Nacional de Desarrollo-PND 2022-2026 y su articulado***

La consideración y garantía de derechos de los pueblos y comunidades étnicas en el PND 2022-2026 es una manifestación del compromiso del Gobierno del cambio con la igualdad y la justicia social y racial. Reconocer y abordar las necesidades y desafíos específicos de esta población, contribuye al fortalecimiento de la cohesión social y al respeto de sus derechos fundamentales. Este enfoque refleja la visión de una Colombia en la que todos los pueblos y comunidades étnicas son valoradas, respetadas y tratadas con igualdad, para lograr un futuro más próspero.

El Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026, *“Colombia Potencia Mundial de la Vida”,* tanto en las bases del Plan como en su articulado, Ley 2294 del 2023, contempla la implementación de medidas especiales para luchar contra la discriminación y el racismo estructural que afecta significativamente a la Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, entre las que se pueden destacar:

1. Política pública para erradicación del racismo y la discriminación racial (Art. 350 del PND) [[9]](#footnote-9).
2. Plan Integral de Reglamentación e Implementación de la ley 70 de 1993 “*por la cual se desarrolla el artículo 55 transitorio de la Constitución Política*” (Art. 351 del PND) [[10]](#footnote-10)
3. Política para el Desarrollo Integral del Pacífico (Art. 290 del PND) [[11]](#footnote-11)
4. Fortalecimiento del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico (Art. 291 del PND) [[12]](#footnote-12)
5. La implementación de la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos del país (contemplada en las bases del Plan y creada mediante el Decreto 0820 del 26 de mayo de 2023).

Los artículos del PND 2022-2026 relacionados con los pueblos y comunidades étnicas del país, buscan garantizar los derechos de estas poblaciones, reconociéndolos como actores diferenciales que han sido históricamente discriminados. En este sentido, “*con este Plan se propone un cambio en el relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y Rrom, para avanzar en la garantía efectiva de los derechos consagrados en la Constitución, superar las desigualdades estructurales, y fortalecer su participación en el desarrollo políticos, económico y social del país*” (Bases del PND, Pág. 264). De igual forma, pretenden garantizar y desarrollar sus derechos en aspectos fundamentales como: 1) Tierras y territorios vitales de los pueblos étnicos; 2) Igualdad de oportunidades y garantía de derechos para poblaciones excluidas; 3) Derecho humano a la alimentación; 4) Economía productiva con Justicia Ambiental y; 5) Convergencia regional para el bienestar y el buen vivir.

Es así como, a través de la Ley del Plan se busca garantizar el derecho al territorio, el acceso a la tierra y la salvaguarda de los territorios étnicos, mediante medidas de protección, restitución, ampliación, saneamiento y titulación colectiva. Igualmente, busca garantizar los derechos de los pueblos y comunidades en iniciativas como el catastro multipropósito, así como la adopción concertada de políticas de reparación histórica y de justicia racial, que garanticen los derechos fundamentales y derechos económicos, sociales y culturales de estas poblaciones.

Asimismo, el articulado del PND busca garantizar el derecho humano a la alimentación, que en el caso de los pueblos y comunidades étnicas se traduce en garantizar disponibilidad y acceso de alimento, adecuaciones nutricionales de la población, teniendo en cuenta las prácticas alimentarias de acuerdo con el contexto cultural y territorial.

De otro lado, el PND busca fortalecer la gobernanza ambiental y la consulta previa sobre las decisiones que puedan afectar a los pueblos y comunidades étnicas, con el fin de lograr una justicia ambiental y la transición energética, que permita desarrollar una economía productiva con justicia ambiental para estas poblaciones. De igual forma, propende por cerrar las brechas de los territorios étnicos en relación con los otros territorios del país. En este sentido, se afirma que no basta con reconocer a las autoridades étnicas, sino que es necesario acompañar la consolidación de un buen vivir en estos territorios.

1. ***Decreto 0820 del 26 de mayo de 2023 - Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos del país***

El artículo 14 del Decreto número 1874 de 2022[[13]](#footnote-13) confió a la Vicepresidenta de la República la misión de creación y coordinación interinstitucional de la comisión intersectorial nacional de reparación histórica para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos del país. En este sentido, mediante el Decreto 0820 del 26 de mayo de 2023, se creó la Comisión Intersectorial, cuyo objetivo es “*la coordinación y articulación intersectorial para la implementación de las políticas, programas, acciones y normas dirigidas a la reparación histórica para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos, estudiar la naturaleza de la deuda histórica y los daños duraderos causados por la Trata transatlántica de seres humanos esclavizados, la esclavización, el colonialismo y el racismo estructural en los pueblos étnicos.*”[[14]](#footnote-14)

Entre las funciones asignadas a la Comisión Intersectorial por el Decreto 0820[[15]](#footnote-15), se destacan entre otras;

*“[…]*

1. *Orientar, coordinar y evaluar los estudios para identificar las propuestas normativas que se requieran para el cumplimiento del objetivo señalado en el artículo 2o del presente decreto.*
2. *Identificar y evaluar los efectos de las normas nacionales e internacionales, las políticas públicas y los planes, programas proyectos y presupuestos dirigidos a los pueblos étnicos*
3. *Definir los lineamientos normativos, institucionales, técnicos y las estrategias para la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Comisión.*
4. *Proponer al sector administrativo correspondiente los mecanismos para adoptar las recomendaciones que se formulen y realizar seguimiento a su implementación*
5. *Promover la implementación de un centro de investigaciones sobre la Trata transatlántica, los impactos y consecuencias presentes del colonialismo, la esclavización en Colombia y el genocidio de los pueblos indígenas, y determinar la naturaleza de la deuda histórica, con el fin de esclarecer y garantizar el derecho a saber, a identificar a los perpetradores, determinantes, beneficiarios y demás aspectos relacionados con estos fenómenos, como insumo para la puesta en marcha de las acciones pertinentes para obtener reparación histórica integral de las poblaciones herederas de los impactos de estos crímenes.*

*[…]*

*13. Recomendar estrategias sectoriales y promover el uso de los mecanismos institucionales, administrativos y de cooperación, que permitan el financiamiento y, por lo tanto, la sostenibilidad de las acciones propuestas por la Comisión.*

*14. Establecer los mecanismos de coordinación, participación y articulación con las autoridades, entidades e instancias relacionadas con la gestión de la Comisión, a través de mesas temáticas específicas que promuevan el adecuado desarrollo de los objetivos y funciones de la Comisión.*

*15. Emitir recomendaciones dirigidas a las autoridades del orden nacional, regional o territorial para que promuevan la formulación, adopción e implementación de políticas, instrumentos normativos institucionales y técnicos en sus instrumentos de planeación y presupuestación.*

*[…]”.*

De igual forma quedó estipulado que esta Comisión será liderada por la vicepresidencia de la República. La Comisión se reunirá de manera ordinaria por lo menos dos veces al año y podrá hacerlo de manera extraordinaria a solicitud de la **vicepresidenta de la República o de la Secretaría Técnica**.

Por último, se establece que la Comisión se desarrollará “con cargo a los recursos de las entidades que la conforman, y se sujetarán a las disponibilidades presupuestales, al Marco Fiscal de Mediano Plazo y al Marco de Gasto de Mediano Plazo”.

En este sentido, se estima que las acciones, medidas y esfuerzos expuestos previamente, constituyen las principales apuestas del Gobierno del Cambio para abordar la discriminación y el racismo estructural en el país y promover la justicia racial, la igualdad y la garantía de derechos de la Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera.

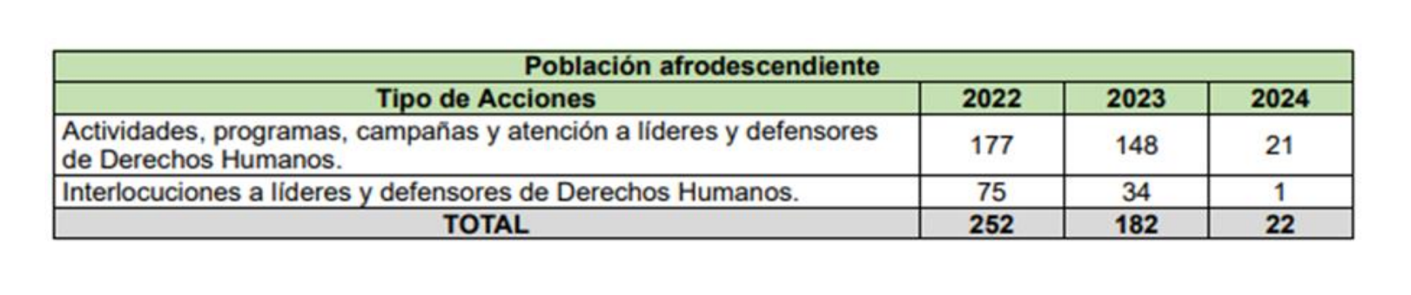
A continuación, se presentan las respuestas allegadas por **Ministerio de Defensa Nacional** en los siguientes términos: Por parte del Comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional –Observatorio de Derechos Humanos- se presentan las siguientes contribuciones: “Las acciones de los Estados y otros actores para promover la justicia racial y la igualdad raciales mediante un enfoque interseccional, incluyendo en relación con:

# **El diseño, implementación y evaluación de leyes, políticas, programas, planes de acción, medidas especiales, procesos y otras iniciativas relacionadas con la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la actuación de los agentes de las fuerzas del orden y el sistema de justicia penal, y otros sectores;**

# **Los esfuerzos para mejorar la participación de los africanos y personas afrodescendientes en los asuntos públicos; y**

# **Medidas para contribuir a la rendición de cuentas y reparación, incluyendo los legados de la esclavización y el colonialismo.”**

1. **Mecanismos institucionales para la prevención**, con el fin de asegurar escenarios de diálogo franco y cercano para el desarrollo de acciones en garantía y protección de los derechos humanos de los líderes y defensores de Derechos Humanos.



1. **Mecanismos institucionales para la protección**, en la implementación de medidas preventivas de la ruta institucional para la atención de hechos de afectación en contra de la vida e integridad en el ejercicio del liderazgo de los defensores de Derechos Humanos.

Texto, Tabla

Descripción generada automáticamente

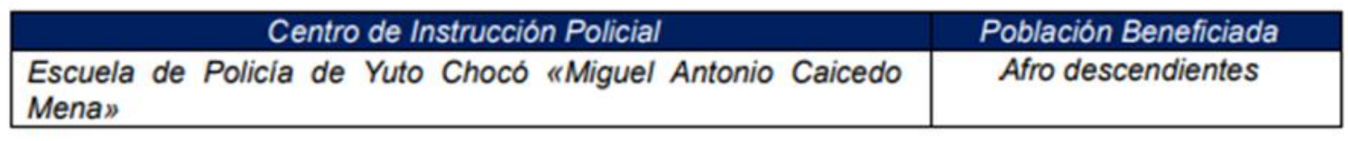
1. **Personal policial capacitado en temas de Derechos Humanos**:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

En términos de la categoría de Grupo de Especial Protección Constitucional otorgada a las comunidades étnicas en Colombia y su reconocimiento por parte de la Policía Nacional, sobre el particular, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Estatuto Disciplinario Policial y el Código Penal, proscriben las prácticas racistas en la institución; a lo que se suman las disposiciones de distintos tratados contra la discriminación, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros.

En tal sentido, se ha previsto iniciativas como la sensibilización y capacitación para la prevención de la discriminación racial en el marco de la Ley 1482 del 30 de noviembre de 2011, que tiene por objeto “garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación”. Como Inclusión institucional y para aumentar la representación de personas (afrodescendiente, indígenas y otras minorías que se constituyen en la nación), se dispuso la creación de centros de instrucción con enfoque diferencial para la preparación y formación de estos grupos poblacionales. Así mismo, lograr que una de sus expectativas laborales, se encuentre la opción de vincularse a la Policía Nacional, así:



Igualmente, para mantener el acercamiento con las comunidades y construir al

tejido social, La Policía Nacional se articula con “El Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana”, creado en 2019, que busca empoderar a los jóvenes del pacifico a través de la educación y brindando oportunidades de vida diferentes a los que le ofrecen los generadores de violencia. Este programa cuenta con la participación de jóvenes (afro, indígenas, LGTBIQ+) becados en universidades del país.

Aunado a lo anterior y con el propósito de atender situaciones de riesgo de defensores de derechos humanos y líderes sociales, la Policía Nacional, a través de la Directiva Operativa Transitoria 008 DIPON-JESEP del 01/04/2023, “Estrategia de Atención a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad-ESPOV”, que incorpora las disposiciones del Decreto 1066 del 16/05/2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”, el Decreto 660 de 2018 “Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios”, y la Directiva Presidencial 007 del 13 diciembre “**RESPALDO Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA**”, se generan acciones para la garantía de los derechos humanos, entre otros destinatarios, integrantes de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, líderes sociales y defensores de derechos humanos, que permiten disminuir cualquier tipo de riesgo coadyuvando a garantizar la vida e integridad de las comunidades y personas. La Directiva Operativa Transitoria 008 de 2023 es un instrumento institucional de tipo estratégico, que establece sinergia y articulación Interinstitucional con el enfoque territorial y el criterio de prevención, protección, investigación judicial e inteligencia, para atención y garantía de 23 tipologías del liderazgo donde se encuentran incorporados indígenas, afrodescendientes, comunales, desplazados, periodistas, sindicales, LGBTI, entre otros. La Estrategia con su directriz desarrolla 4 líneas de acción, se operacionaliza mediante 5 iniciativas estratégicas y 4 rutas de actuación:

**Líneas de acción**

− Prevención

− Protección

− Investigación

− Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas

**Iniciativas estratégicas**

• Coordinación y acopio de Alertas de Inteligencia.

• Apoyo judicial en esclarecimiento de homicidios.

• Interoperabilidad de las estrategias con énfasis en la prevención.

• Actualización y unificación de rutas de actuación Institucional.

• Coordinación multisectorial y multinivel, cultura de respeto, promoción y

protección de los DDHH.

**Rutas**

• Ruta de Actuación Institucional en el Territorio.

• Ruta de Articulación del Nivel Central.

• Ruta de Actuación Interinstitucional en el Territorio.

• Ruta de Actuación Institucional CIPRAT

En atención a la adopción de políticas, programas, esfuerzos y medidas en las cuestiones que ocupan la Resolución 47/21, el Comisionado de Derechos humanos para la Policía Nacional presenta las siguientes consideraciones:

Que la Policía Nacional ha fortalecido sus acciones institucionales para promover

el respeto, protección y garantías de las comunidades Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros. Remontándonos a la historia, mayo es considerado el mes de la herencia africana, en homenaje a la abolición de la esclavitud, consagrada en la Ley 21 de mayo 21 de 1851 y en reconocimiento a la plurietnicidad de la Nación Colombiana y la necesidad que tiene la población afrocolombiana de recuperar su memoria histórica, se promulgó mediante la Ley 725 de 2001 por la cual se establece el 21 de mayo de cada año como Día Nacional de la Afrocolombianidad; espacio propicio para generar acciones positivas que beneficien a los grupos mencionados para lograr mencionado fin.

La Policía Nacional da primacía al trabajo para el reconocimiento, justicia y desarrollo que promueven el respeto, la protección y la realización de todos los

derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en aras de promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la

cultura de los Afrodescendientes y su contribución al desarrollo de la sociedad, fortaleciendo los mecanismos necesarios para dar aplicación plena y efectiva a la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, así como toda aquella normatividad jurídica existente a nivel nacional.

A partir del convenio 169 de 1989 la OIT hizo un explícito reconocimiento de los

Derechos Humanos y las libertades de los pueblos indígenas entre las que se incluyen las comunidades afrocolombianas, palanqueras y raizales; por otro lado, el Estado colombiano ha estado a la vanguardia en América Latina en el

reconocimiento constitucional y legislativo de los Derechos Humanos de los grupos étnicos incluyendo a la comunidad negra. Sin embargo, circunstancias como el conflicto interno, el crimen organizado y el narcotráfico hacen que por

estos patrones históricos el Estado tenga que realizar esfuerzos más significativos para hacer cumplir los diferentes mandatos para la protección de poblaciones vulnerables.

Igualmente, en la implementación del proceso de Integridad Policial, que tiene como objetivo “Direccionar el comportamiento ético de los servidores que integran la Institución, mediante el desarrollo de políticas, planes y actividades

para prevenir, controlar y sancionar las conductas que afectan la integridad policial y el respeto por los derechos humanos”, se ha construido la guía 1IP-GU 0004 “***GUIA DE ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES***”, que plantea los lineamientos para la actuación del hombre y mujer policía con base en la normatividad existente sobre la atención que se debe brindar a las poblaciones de especial protección constitucional (Indígenas, Afrodescendiente, Defensores de Derechos Humanos y Desplazados) para garantizar sus derechos conforme al marco constitucional y legal, nacional e internacional así:

*“[…]*

***CAPÍTULO II. POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE, NEGRA, PALENQUERA Y RAIZAL***

*En Colombia las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales*

*se autodenominan como Pueblo Negro, autodenominación que acogió la legislación colombiana en la ley 70 de 1993, donde definió qué son las comunidades negras y cuáles son sus derechos especiales. De acuerdo con el censo celebrado por el gobierno colombiano en 2005, la población afrodescendiente representa aproximadamente el 10% de la población colombiana, este número lo consideran las comunidades negras como bajo, por*

*lo cual se están tomando medidas para que en el próximo Censo pueda tenerse*

*una mayor precisión. Pueblan la Región Pacífica, San Andrés y Providencia, valles*

*interandinos como el Valle del Río Patía, el Valle del Río Cauca, los Valles medio y bajo del Río Magdalena; también el Litoral Caribe, la llanura de la Región Sabanera, la llanura de Urabá, el departamento del Cauca y la Región Atlántica.*

*En el marco de las obligaciones internacionales ratificadas por Colombia y que hacen parte de su bloque de constitucionalidad para combatir la discriminación*

*racial se encuentran: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas*

*las Formas de Discriminación Racial.*

*La discriminación racial, a pesar de los mandatos consagrados tanto en la Constitución Política como en instrumentos internacionales ratificados por Colombia, existe en las personas en todo el país y se reproduce a través de actos*

*tanto tácitos como explícitos, por parte de autoridades estatales y las personas.*

*Ello responde a la existencia de prejuicios raciales y patrones culturales discriminatorios construidos y arraigados en la sociedad desde la colonia española.*

*De conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política, el deber del Estado y de las autoridades es garantizar la igualdad y la no discriminación. Las autoridades tienen el deber de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y para que se adopten las medidas necesarias en favor de grupos discriminados o marginados con el fin de lograr su inclusión social y a todos los niveles y el respeto a su dignidad.*

*Las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales son sujetos de especial protección constitucional lo que les impone a las autoridades estatales a todo nivel, deberes especiales de prevención, protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos. Esto se da a través de medidas y políticas ordinarias, y a través también de medidas de diferenciación positiva que atiendan a su especial condición de vulnerabilidad e indefensión y propendan por la igualdad real a través de un trato preferente.*

*La causa principal que genera violencia y discriminación contra las comunidades*

*y personas negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, fue la esclavización de la que fueron víctimas desde el siglo 16 durante la colonia española (años de 1.550 en adelante más o menos). Se conoce como la gran trata transatlántica que consistió en la comercialización, esclavización, y despojo de sus derechos a la dignidad por el sólo hecho de ser, a la libertad y a la vida. A nivel del desplazamiento forzado, las poblaciones más afectadas por este fenómeno son los grupos étnicos, especialmente las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y los pueblos indígenas. Estos prejuicios arraigados dan lugar a que se los trate como como delincuentes o guerrilleros sin que medie ninguna razón, ni una acusación formal. Esta es una forma de estigmatizarlos. Frecuentemente son víctimas de maltrato, abuso de las autoridades y de abuso de la fuerza. Además, son afectados por los mayores índices de pobreza, analfabetismo, insalubridad, entre otros factores materiales.*

*La Policía Nacional, tiene dentro de sus objetivos brindar un trato respetuoso y*

*digno a la ciudadanía, sin importar su orientación de sexo, raza, color, religión y cultura, edad, condiciones sociales o discapacidad estableciendo acciones adecuadas y labores especializadas para prevenir todo tipo de discriminación racial hacia las personas de las poblaciones negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales*

*[…]”*

Además, la Directiva No. 07 de 2007 “Comunidades afrocolombianos” expedida

por el Ministerio de Defensa Nacional, constituye el conjunto de instrucciones generales y específicas por parte del Ministro de Defensa a los Comandantes de

las Fuerzas y la Policía Nacional, así como a las diferentes Unidades de la Fuerza

Pública, establece como objetivo “Fortalecer la política de reconocimiento, prevención y protección de los DDHH de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras” y acciones “Tomar medidas para disuadir acciones de los grupos armados ilegales en contra de estas comunidades, Procurar su integridad durante la ejecución de operaciones militares y policiales en los territorios colectivos, Mantener una adecuada coordinación entre autoridades de la Fuerza Pública y las comunidades, Capacitar a la Fuerza Pública en materia de derechos individuales y colectivos de las comunidades. Por otro lado, a través de la Ley 2196 de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto Disciplinario Policial estableciendo:

*“****ARTÍCULO 23****. Igualdad ante la ley disciplinaria. Los funcionarios con atribuciones disciplinarias tratarán de modo igual a los destinatarios de esta ley, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional, étnico, lengua; identidad de género, orientación sexual, religión, grado de cualquier otra índole.”*

*“****ARTÍCULO 45****. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:*

[…]

*32. incurrir en actos o hechos que constituyan discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad, identidad de género, orientación sexual, lengua, opinión, ideología política, enfermedad o cualquier otra condición, actividad o circunstancia personal o social”.*

*Mas aún, la Resolución No. 2572 del 15 de agosto 2023, “Por la cual se expide la Política de Integridad Policial” establece a través de enfoques la orientación de las responsabilidades institucionales para la implementación y despliegue esta de acuerdo con las funciones y competencias de cada unidad o dependencia policial. Con cuatro enfoques desde una visión estratégica, de cultura, rendición de cuentas y diferencial, en lo cual este último se describe como “un desarrollo progresivo del principio de igualdad y de no discriminación que reconoce que, aunque todas las personas son iguales ante la ley, existen diferencias y desigualdades que afectan a sectores o grupos históricamente discriminados en*

*razón de su género, ciclo vital, pertenencia étnico -racial, condición de discapacidad, identidad de género, orientación sexual, situaciones socioeconómicas, víctimas del conflicto armado y políticas, entre otras.”*

Habría que decir también, que el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos del 14 de febrero de 2024, que analiza la situación de los derechos humanos en Colombia en 2023, en el acápite Fuerza Pública declaró:

“*24. El ACNUDH asesoró a la Policía para la inclusión de estándares internacionales de derechos humanos en el Tomo de Derechos Humanos y el Plan de Educación Integral y asesoró en la elaboración de la Política de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. La Oficina saluda la disposición del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía, para construir espacios de diálogo”.*

Por otra parte, los señores directores, jefes y comandantes en sus diferentes niveles de gestión y responsabilidad cuentan con instrucciones de adoptar los mecanismos necesarios para dar a conocer las distintas disposiciones y adelantar

acciones institucionales de supervisión y control así:

1. La divulgación a todos y cada uno de los funcionarios de la institución policial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos **Pacto de San José de Costa Rica**, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, por la cual los Estados Parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Interlocución permanente con líderes y organizaciones activistas de los Derechos Humanos de las comunidades afrocolombianas, de donde surgen iniciativas como la sensibilización y capacitación del personal policial para la prevención de la discriminación racial en el marco de la Ley 1752 de 2015, que tiene por objeto “*sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación*.”

Adicionalmente, el componente de interlocución en la Policía Nacional ha determinado como tarea primordial el acercamiento liderado y concentrado con

las comunidades afrodescendientes y la atención a los requerimientos allegados

por estas comunidades con el concurso de los comandantes de región como una

forma de posicionamiento de su gestión.

* Disponer Oficiales de enlace los cuales tienen la función de promover la adopción de mecanismos de protección institucional dirigidos a la población vulnerable, hacer estricto seguimiento a la atención y asesoría en forma oportuna a las comunidades que requieran un tratamiento diferencial por su especial condición y exposición frente a posibles violaciones de los Derechos.
* Acompañamiento a las instancias del orden Nacional, Departamental y Municipal para el desarrollo de acciones afirmativas para los miembros de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.
* Inclusión institucional de personal de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, Indígenas y otras minorías étnicas.
* Conmemorar el día de la afrocolombianidad, como forma de visibilización, equidad, integración, reconocimiento, valoración y divulgación de los derechos étnicos y culturales de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Finalmente, para la Policía Nacional se hace necesario aunar esfuerzos para garantizar los Derechos Humanos de toda la comunidad afrodescendiente; reconociendo de antemano el trabajo adelantado por el grupo conformado a nivel internacional en la implementación efectiva del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 68/237 del 23 de diciembre de 2013 y el Programa de Acción de Durban donde se atiene a las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que son los principales instrumentos internacionales para

la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; como escenario propicio para generar acciones orientadas a garantizar el Reconocimiento, el Desarrollo y la Justicia de las poblaciones Afrocolombianas y contendrá medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades de dicha población.

1. DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ver, DANE página web: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional/autorreconocimiento-etnico> [↑](#footnote-ref-2)
3. Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) [↑](#footnote-ref-3)
4. [VF-Orden2da-EstudioEvaluacionCensal.pdf (dane.gov.co)](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/VF-Orden2da-EstudioEvaluacionCensal.pdf) [↑](#footnote-ref-4)
5. Bases del Plan Nacional de Desarrollo, PND 2022-2026 “Colombia potencia de la vida”, expedido mediante la ley 2294 de 2023. [↑](#footnote-ref-5)
6. Adaptado de Corte Constitucional, Sentencia T-145 de 2015. Fuente: DANE. Ver: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional> [↑](#footnote-ref-6)
7. Ver la Guía y la presentación en los siguientes links: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/guia-inclusion-enfoque-difencias-intersecciones-produccion-estadistica-SEN.pdf y chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/presentacion-guia-inclusion-enfoque-difencias-intersecciones-produccion-estadistica-SEN.pdf [↑](#footnote-ref-7)
8. **ARTÍCULO 355. PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CON PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES, PALENQUERAS Y RROM.** Las entidades en el marco de su autonomía y con la participación de los pueblos indígenas y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom determinarán las partidas presupuestales para el cumplimiento de los acuerdos pactados con estos e incorporados integralmente en la presente ley, el cual se dará en el marco de los tiempos establecidos normativamente con el fin de que cada entidad incluya estas en la priorización para la programación de su presupuesto. Con este fin, el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación coordinarán la convocatoria de las entidades concernidas, siendo estas últimas las responsables de la programación de las partidas presupuestales y su determinación presentada en una sesión anual conjunta de la Mesa Permanente de Concertación y la Mesa Regional Amazónica. [↑](#footnote-ref-8)
9. **ARTÍCULO 350. POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ERRADICACIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL**. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional formulará y adoptará una política pública para la erradicación del racismo, la discriminación racial y para la reivindicación de derechos de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y Rrom bajo la coordinación interinstitucional e intersectorial del Ministerio de Igualdad y Equidad.

   Esta política será construida de manera participativa, para lo cual deberá efectuarse la consulta previa con los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y Rrom a través de sus autoridades en la Mesa Permanente de Concertación Indígena, Espacio Nacional de Consulta Previa y la Comisión Nacional de Diálogo RROM tendrá como objeto orientar la acción pública, formular directrices y diseñar instrumentos para la erradicación del racismo y la discriminación racial, la garantía de sus derechos, la superación de las desigualdades estructurales y el fortalecimiento de su participación en el desarrollo político, económico y social del país. [↑](#footnote-ref-9)
10. **ARTÍCULO 351. PLAN INTEGRAL DE REGLAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 70 DE 1993.**Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional formulará, diseñará e implementará un Plan Integral de Reglamentación e Implementación de la Ley [70](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0070_1993.html#0) de 1993. Este plan servirá para acelerar los procesos en marcha de elaboración, consulta y expedición de los Decretos Reglamentarios, así como las medidas para garantizar los derechos del acceso a la tierra y la salvaguarda de los territorios, igualdad de oportunidades y garantías para los pueblos afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros.

    Las entidades estatales del orden nacional, conforme a sus competencias, deberán identificar las asignaciones presupuestales específicas para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, y presentarán al Departamento Nacional de Planeación las asignaciones de manera desagregada [↑](#footnote-ref-10)
11. **ARTÍCULO 290. POLÍTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACÍFICO**. En el marco del cierre de brechas territoriales de desarrollo económico y social y con el fin de dar prioridad al avance en el cumplimiento de los 176 acuerdos priorizados del Paro Cívico de Buenaventura, el Plan Integral Especial de Desarrollo de Buenaventura según los términos del artículo [5o](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1872_2017.html#5), parágrafos 4o y 5o y del artículo [10](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1872_2017.html#10) de la Ley 1872 de 2017; los acuerdos del Paro Cívico del Chocó y de las comunidades del Norte del Cauca y de la costa pacífica Nariñense; los Planes de Acción Territorial (PATR) para la subregión del Pacífico Medio, del Pacífico y frontera Nariñense, Alto Patía y Norte del Cauca, Chocó y los planes definidos por las comunidades víctimas del conflicto armado, el Gobierno Nacional bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República y con el apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, diseñarán e implementarán una política pública integral que contenga una hoja de ruta que priorice proyectos estratégicos y las asignaciones presupuestales requeridas, dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, para el desarrollo integral del Pacífico, conforme los criterios de priorización que defina el Gobierno.

    **PARÁGRAFO**. Esta política se regirá por los principios de transparencia, equidad, meritocracia y contará con enfoque de género y diferencial. [↑](#footnote-ref-11)
12. **Ley 2294 del 2023.** **ARTÍCULO 291. FORTALECIMIENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO.**Se fortalecerán las inversiones en los componentes de i) Agua Potable y Saneamiento Básico, ii) Energización Rural y Energías Alternativas Sostenibles y iii) Mejoramiento de la Conectividad en Transporte, y se crea el componente de iv) Conectividad Digital, en el ámbito de competencia para la actuación territorial del Fondo Para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP). Asimismo, en atención al Decreto 1874 de 2022, se amplía la competencia para la intervención en los municipios de los departamentos del Pacífico: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional.

    **PARÁGRAFO 1o**. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propenderá por la asignación de recursos adicionales al FTSP, que financiarán las etapas de preinversión e inversión en cualquiera de los componentes. Dicha financiación será definida a través de espacios de concertación que tengan en cuenta las necesidades de acompañamiento técnico planteadas por las administraciones territoriales, y de conformidad con los avances posteriores en la formulación y viabilización de los proyectos.

    **PARÁGRAFO 2o**. Para la financiación del FTSP se podrán adelantar operaciones de préstamo con banca multilateral adicionales o complementarias a las suscritas.

    El Ministerio de Hacienda y Crédito Público diseñará y ejecutará las mejoras a la estructura administrativa, financiera y de gobernanza del Fondo citado, en procura de mejorar la eficiencia, eficacia y coordinación de las políticas y objetivos a su cargo, para la ejecución de los proyectos. [↑](#footnote-ref-12)
13. “Por el cual se confía a la Vicepresidenta de la República de Colombia unas misiones o encargos” [↑](#footnote-ref-13)
14. Artículo 2 Decreto 0820 de 2023 [↑](#footnote-ref-14)
15. Artículo 4 [↑](#footnote-ref-15)